

Sí al Consejo Asesor Fiscal

Rechazada la posibilidad por los últimos dos gobiernos, finalmente se abre una rendija para la instalación de un Consejo Asesor Fiscal Independiente en el sexenio próximo, cuya tarea sería ubicar la fórmula mágica para equilibrar ingreso, deuda y desarrollo. La posibilidad tiene ya la bendición del Banco de México. Durante la era Carstens, la idea diseñada por el Fondo Monetario Internacional había creado fricciones entre éste y la Secretaría de Hacienda, que calificaba de innecesaria la instancia.

Al margen de su utilidad técnica, la posibilidad de integrar un grupo de expertos en opción de alertas tempranas daría una señal de certeza a los mercados frente a las críticas que apuntan a un crecimiento desbordado de la deuda para atender las promesas de programas sociales. La ruta habla, desde otro ángulo, de un escenario fiscal que incentive la actividad productiva y, en paralelo, le dé sustento a la posibilidad de un gobierno detonador del crecimiento económico.

De acuerdo con lo planteado, el Consejo Asesor Fiscal se integraría por cinco expertos sin filiación política, insaculados por Comisiones Unidas del Congreso de la Unión. La exposición de motivos habla de la necesidad de una evaluación independiente de la política fiscal que ayudaría al cumplimiento de compromisos gubernamentales de equilibrio presupuestal. Se revisarían los pronósticos macroeconómicos; se vigilaría el cumplimiento de las reglas fiscales y se haría pública la sustentabilidad de las existencias en caja.

Aunque la Secretaría de Hacienda habla de heredarle al nuevo gobierno finanzas sólidas, es evidente el escenario de sobreendeudamiento del país que reclamaría para el año próximo una erogación cercana a los 700 mil millones de pesos para el pago del servicio, léase intereses. Como recodará usted, el país sufrió el amago de degradación de su calidad crediticia, al alcanzar una relación frente al Producto Interno Bruto y la deuda integral de 50%, frente a 42% que reclama como tope la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Consejo Asesor Fiscal, naturalmente, tendría etiqueta de independiente, y aunque sus recomendaciones no serían vinculatorias, el hacerlas públicas exhibiría a la autoridad hacendaria. Una de las pautas podría ser, por ejemplo, si es viable, de cara a la necesidad de sanas finanzas públicas, el aumento sólo una vez al año en el costo de las gasolinas en función de la inflación, y de laxar el escenario fiscal para Pemex.

Empujada la opción por la Coparmex y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, consulta al calce a las bases, la negativa de la Secretaría de Hacienda hablaba de que el gobierno ha demostrado consistentemente su credibilidad. La respuesta al escrutinio interno, según ello, está en la gran cantidad de bancos, calificadoras de deuda y otras instancias que analizan las finanzas públicas del país.

El problema es que el escrutinio se hace desde el plano reactivo, es decir, a toro pasado, y lo que se reclamaría es, justo, un escenario preventivo. Hasta dónde llega el tope en materia, por ejemplo, de gasto social, frente a la catarata de compromisos del gobierno al relevo.

Siempre sí. Entre los proyectos de infraestructura planteados por el gobierno al relevo está la de revivir la posibilidad del tren de alta velocidad México-Querétaro, cuyo proyecto canceló el actual gobierno en medio de un escándalo. De hecho, está pendiente todavía la resolución sobre la demanda que planteó ante cortes internacionales la empresa china que encabezó un consorcio que había ganado la licitación. En este figuraba el grupo constructor Higa. La anulación se dio en la antesala del escándalo de la Casa Blanca, construida y financiada por éste.

EMPRESA DE ALBERTO BARRANCO. Julio 20 del 2018

¿Rebelión en el IMSS?

A contrapelo de la ortodoxia, este año la llamada Asamblea Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social se celebró prácticamente en privado en la residencia presidencial de Los Pinos, con la novedad de la ausencia de los integrantes del Consejo Técnico del organismo, en el papel la máxima autoridad de éste. La tradición ubicaba el evento en un recinto de la instancia tripartita, en los últimos años el remodelado auditorio Juan Moisés Calleja, con participación estelar de algún representante sectorial en calidad de vocero.

La función de éste, ya del sector obrero o empresarial, era responder el informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y riesgos del organismo, en el que se plantean fortalezas y debilidades. Instaurada la posibilidad desde el gobierno zedillista frente al evidente resquebrajamiento de las finanzas del instituto, la idea era sensibilizar a los poderes para ubicar salidas frente a la posibilidad de colapso. Lo curioso del caso es que desde la gestión de José Antonio González Anaya, a quien sucedió Mikel Arriola, el énfasis del informe apunta más a fortalezas que a debilidades, dejando la impresión de que se le dio la vuelta a la posibilidad de catástrofe.

El IMSS, dice el último informe, tiene viabilidad financiera al menos hasta 2030, es decir 10 años más allá de lo que se calculaba al inicio del sexenio. Y aunque sería temerario afirmar que se manipulan las cifras, la ausencia de los integrantes del Consejo Técnico podría llevar a colegios que no estuvieron de acuerdo con el texto. Aunque es evidente el esfuerzo por hacer rendir esta tesis, ya en la compra consolidada de medicinas que ha permitido generar ahorros por 17 mil 600 millones de pesos; ya con la novedad de las citas digitales y las operaciones en fin de semana...

Así, a pesar de las reformas que se le han hecho a la Ley del Seguro Social, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones arrastra un boquete que araña los dos billones de pesos, lo que obligaría a una solución de fondo. Peor aún, el Seguro de

Enfermedades y Maternidad y el de Salud Familiar arrastraban hasta el año pasado un faltante de reservas equivalente a 12 puntos del Producto Interno Bruto. Y aunque el crecimiento de los afiliados, que en el sexenio actual llegará a 4 millones, significa mayor ingreso, del otro lado de la moneda se reclama más infraestructura para su atención.

El caso es que aun cuando se han abierto 16 hospitales en la actual administración y 40 unidades médicas familiares, en paralelo a nueve clínicas de mama, lo que representa 20 mil camas, el número de éstas sigue siendo deficitario. Si en 2011 se contaba con 0.82 por cada mil afiliados, en 2016 la cifra se había reducido a 0.76. Lo curioso del caso es que el documento que antes convocaba a la polémica, foros empresariales, al calce, hoy pasó de noche.

Derechos adquiridos. Aunque se habla de una reforma de ley para ubicar un tope salarial a los altos funcionarios públicos, cuyo límite sería la percepción presidencial, en realidad ésta existe desde hace varios años. El problema es que no se ha exigido su aplicación letra por letra. Ahora que la prohibición no afectaría a los empleados y funcionarios de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad que eventualmente rebasen el monto, dado que la ley que los convirtió en entidades productivas de Estado les concedió autonomía presupuestal. Bajo la protección constitucional que conculca derechos adquiridos, tampoco los funcionarios que se mantengan en el aparato público tras el cambio de gobierno podrían ser objeto del recorte. Estamos hablando de directores generales y eventualmente directores de área.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Julio 23 del 2018

El método de gobernar con enemigos

Son millones de personas las que hoy aprueban la gestión de Donald Trump y que están seguras de que son los republicanos, el FBI, los europeos, los chinos, los mexicanos, los canadienses y quizá hasta los marcianos los que no lo dejan gobernar como él quisiera. Nos parece cuesta arriba entender cómo esos ciudadanos estadounidenses pueden respaldarlo ciegamente sin darse cuenta de todos los males que está provocando su presidente. Hasta sus grandes logros, como el paquete fiscal, eventualmente tendrán un costo alto para esa economía. Y todo lo demás es una resta constante. La guerra comercial, la opresión a los migrantes, las minas de carbón, la confrontación con sus aliados, la sumisión ante los tiranos. Todo costará caro y su reparación será tardada.

Hay que entender que a esos millones de electores no les importa tanto lo que hace Donald Trump como aquello a lo que se opone. Es el paladín de todos los ciudadanos que creen que su condición económica, laboral y hasta personal pasa por la responsabilidad de sus políticos. Donald Trump se vendió como el antisistema, como el que acabaría con el pantano de Washington, y para eso necesita enemigos, por eso hoy mantiene intactas esas figuras de hostiles adversarios que lo quieren dañar. La mala prensa, los republicanos, los servicios de

inteligencia, los socios comerciales abusivos, los migrantes, los mexicanos. En fin, una larga lista de mafiosos del poder que quieren frenar su proyecto transformador.

Mientras mantenga alimentada con ese odio a su base electoral, no habrá manera de frenarlo, y no dude en apostar que logrará su reelección dentro de dos años. Juan Trump promete replicar el modelo en México.

La primera llamada del final de la luna de miel de la prudencia y la institucionalidad del siguiente gobierno vino al cierre de la semana pasada. Ni hablar, el Instituto Nacional Electoral cachó al partido Morena desviando recursos, vía un fideicomiso, de una supuesta ayuda a los damnificados del sismo a sus campañas electorales. Y lo que pudo ser un gran escándalo previo a las elecciones terminó en una multa millonaria que no abolla la abrumadora victoria de Andrés Manuel López Obrador. Los pescaron en el fraude, y esa enorme masa que los apoya ciegamente ha tomado dos caminos: o cierran los ojos o lo justifican. Hasta ahí, parte de un fenómeno que da materia de estudio a los politólogos.

El problema es que Andrés Manuel López Obrador ha decidido reaccionar como si fuera todavía el eterno opositor y no el virtual presidente electo. Es una vil venganza, culpó el candidato ganador, y ha empezado con ello la recolección de enemigos necesarios para la forma de gestionar su gobierno. Los primeros en la lista de los nuevos enemigos, de la renovada mafia del poder, son los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Los primeros, pero no los únicos. El Congreso no podrá ser su antagonista porque lo tiene plenamente dominado, por lo tanto, se requerirá de opositores conspiracionistas que puedan ser acusados de frenar la cuarta transformación si ésta no avanza conforme a lo planeado.

Hay que escuchar al morenista Fernández Noroña, quien es indiscreto, pero no mentiroso. Advierte que la luna de miel acabará pronto, que López Obrador buscará acumular más fuerza porque están aquí para dar marcha a todas las reformas y poner todo al servicio del pueblo. Tal barbaridad requiere de crear enemigos, antagonistas a quienes culpar cuando empiecen los fracasos. Todo para que la base de López Obrador mantenga el apoyo irreflexivo, no por lo que haga y deshaga su gran líder, sino por todo aquello a lo que se opone.
ecampos@economista.com.mx